

EDITORIAL

Una palabra define lo que hasta ahora han sido los intentos de paz en el país: utopía. Con los grupos al margen de la ley, el panorama es alentador. En primer lugar, Colombia se encuentra en una situación muy distinta a la de procesos anteriores: el fortalecimiento institucional y la presión militar han permitido recuperar el control territorial de varias zonas del país y el monopolio de las armas por parte del Estado es una realidad cada vez más cercana. Las FARC se encuentran debilitadas, sus acciones e influencia cada día pierden más relevancia. Del mismo modo, el país se ha encaminado por la senda del progreso social; proyectos como la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras permiten enfrentar las raíces del problema: la injusticia social, la exclusión y la pobreza. Así, el ancla que nos mantenía sumidos en una violencia perpetua parece ceder a las presiones e ilusiones del pueblo colombiano que, a raíz de los recientes acercamientos, se mantiene a la expectativa ante el resultado de un proceso que no parece ser producto de la improvisación.

Seguramente hay motivos para la esperanza, pero también es seguro que en el camino, los villanos, como en cualquier historia, intentarán vulnerar los propósitos pacifistas de una gran mayoría, si es que de algún modo se

podiera diferenciar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los enemigos de la paz, que tanto se ven beneficiados por el negocio de la guerra, utilizarán todas las herramientas, tanto legales como ilegales, para truncar los diálogos. Se debe poner de manifiesto que ante cualquier ataque o atentado terrorista de la guerrilla no se puede apresurar para pedir el final de la negociación o tildar el proceso de fracaso, sino que por el contrario se debe presionar para poner rápidamente fin al conflicto.

Así, los colombianos no somos la paz, pero sí somos su causa, y como la mayoría, *Divergencia* aplaude cualquier intento no violento que dé como resultado el fin del conflicto, siempre que el marco que se le ofrezca a la contraparte no sea el de la impunidad. Esto a sabiendas de que el proceso tiene un costo, se deberá hacer una concesión a determinados delitos, y se tendrá que sacrificar justicia en favor de un bien tan preciado como la paz; sin olvidar antes que no puede haber amnistía absoluta, y los delitos de lesa humanidad no pueden ser perdonados, que en el caso de la guerrilla son bastantes. De esta manera los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil deben estar encaminados hacia la reparación, la verdad, el no olvido y la no repetición, con el

propósito de reducir a su expresión mínima la impunidad y la injusticia.

En consecuencia, no podemos olvidar que el pasado cercano nos revela los atropellos que hemos recibido por parte de los grupos al margen de la ley, y aunque una amnesia colectiva empañe nuestra capacidad de condenarlos, es necesario que la sociedad no olvide y exija un contrapeso que cumpla con los principios de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho todos los colombianos, en especial los que han sido víctimas en más de medio siglo de conflicto. Por ende, *Divergencia* considera necesaria la necesidad de establecer una comisión de la verdad para poder llevar a cabo una catarsis de las heridas del conflicto; casos exitosos como el de Perú señalan lo beneficioso de estas comisiones.

Una sociedad que anhele la paz no debe limitarse a alcanzar el fin de la guerra, por lo menos no para el caso de Colombia, un país de contrastes y diferencias. Mientras en Colombia se mantenga la exclusión social y no se solucione el problema de la coca, el conflicto va a perdurar y va a tomar otras formas, y la insurgencia existirá en tanto funcione un orden con esas características.

El fin del conflicto es apenas el inicio del reto, es lanzarse a navegar en mares procelosos, conscientes de que aun con el fin de la violencia guerrillera, quedan procesos pendientes, deudas con la so-

iedad civil, reparaciones incompletas con los desplazados, verdades dichas a medias y pobreza; el lastre con el que la mitad de colombianos luchan por hacerse a una realidad, no solo menos violenta sino también más humana. El acuerdo como el que se plantea con la guerrilla propone el fin al conflicto, pero no la paz; sin embargo, éste sí es un gran alivio para la democracia y sobre todo para la población rural, que es la que sufre de manera más cercana y fuerte las inclemencias de la guerra. Dicho de otro modo, el fin de la confrontación armada es condición necesaria, pero no suficiente si el objetivo es alcanzar la paz.

Hay muchas imágenes grabadas en nuestra memoria sobre los fallidos intentos por lograr la tan ansiada paz. Más allá de todo esto, no debemos ser indiferentes ante esta nueva oportunidad; al contrario, debemos ser optimistas y buscar la forma de contribuir para que estos pasos sean los correctos y así acabar con el único conflicto interno vigente, que ha perdurado más de 50 años. Esta podría ser la última oportunidad para que esta generación nos entregue un país que pueda pensar en otro objetivo de política diferente al fin de la guerra entre colombianos y colombianos, y para que las próximas puedan proyectar el país de cara a resolver su verdadero problema y seguir apostando por la consolidación del Estado, sobre todo en las regiones más apartadas.